

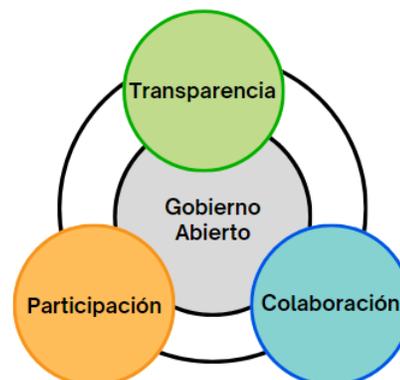


## Foro de Discusión

### El Gobierno Abierto Local y su contribución a la promoción de la sostenibilidad y la acción climática

En un contexto de triple crisis ambiental –pérdida de biodiversidad, contaminación atmosférica y cambio climático— el enfoque de Estado abierto plantea un modelo de gobernanza innovador para dinamizar espacios de articulación y trabajo multiactor, en el que gobiernos, sociedad civil, sectores académico y privado impulsen políticas públicas transformadoras. La instalación del paradigma de Estado abierto ha caminado de la mano de la iniciativa global Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) que actualmente integran 15 países de la región y que ha permitido desde su establecimiento en 2011, la creación de 75 planes de acción de Gobierno/Estado abierto con 1435 compromisos de políticas públicas innovadoras para fortalecer los ejes del paradigma: transparencia, participación y colaboración.

Principios de un Gobierno Abierto



Aun cuando los Planes de Acción de Gobierno Abierto impulsados por la Alianza para el Gobierno Abierto fueron inicialmente de niveles de gobiernos nacionales, muchas de las innovaciones sociales, que son ejemplo de los beneficios del gobierno abierto, han surgido desde niveles locales y son justamente éstos los que generan los más altos impactos en la sociedad. Una iniciativa de gobierno abierto local adquiere especial relevancia al considerar que son los municipios la primera cara del Estado frente a la ciudadanía, son éstos los responsables de la gestión de servicios sociales y comunitarios, por lo que la promoción de la transparencia y la apertura hacia más participación y colaboración ciudadana comienzan a volverse imperativos. Las iniciativas encaminadas a la apertura de información y a la participación y colaboración de los actores sociales en la toma de decisiones de sus territorios, ha llevado a que la adopción de nuevas estrategias para implementar el uso de nuevas tecnologías y mecanismos de



Gobierno Abierto en los niveles subnacionales sea hoy en día una práctica obligada y necesaria.

Es por ello que en 2016 la OGP dio inicio al programa OGP local para fomentar la creación de planes de acción de gobierno/Estado abierto en los niveles subnacionales. Actualmente, de los [152 gobiernos locales](#) en todo el mundo, la región de América Latina y el Caribe cuenta con 50 miembros que forman parte de la Alianza para el Gobierno Abierto los cuales han cocreado 31 planes de acción con las comunidades locales. Estos planes han sido verdaderas plataformas para promover la transparencia y rendición de cuentas, empoderar a las comunidades, combatir la corrupción, aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza y generar nuevos servicios para la ciudadanía en materia de salud, educación, medio ambiente y seguridad, entre otros.

Dado que los niveles subnacionales y locales son una pieza clave para generar el consenso y las políticas necesarias para promover la sostenibilidad ambiental del desarrollo y abordar la emergencia climática, el enfoque de gobierno abierto en la gestión pública local puede ser transformador.

Actualmente, al menos 8 gobiernos locales de la región impulsan compromisos ambientales y dos gobiernos locales han hecho referencia directa al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), instrumento regional pionero para catalizar la acción y gobernanza climáticas en sus planes de gobierno abierto locales.



### Jurisdicciones locales miembros de OGP



Los gobiernos locales pueden promover la sostenibilidad ambiental del desarrollo a través de un mayor acceso a los datos, transparencia y participación pública en el desarrollo e implementación de políticas públicas que transversalicen la acción climática en los territorios. El modelo de gobernanza de la Alianza para el Gobierno Abierto, a través de grupos de trabajo multiactorales para la cocreación de iniciativas, permite asegurar que las políticas para abordar la crisis climática sean más efectivas y tengan el respaldo y la legitimidad de la ciudadanía para su implementación.